

Boletín



Oficial.

PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales de Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como así mismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanare de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del BOLETÍN.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos, Colon, número 16
—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña Maria Cristina (Q. D. G.) y las Serenísimas Señoras Infantas Doña Maria de la Paz y Doña Maria Eulalia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

Gaceta núm. 105.

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Ciudad-Real y el Juez de primera instancia de aquella capital, de los cuales resulta:

Que en 17 de Mayo de 1877 don Antonio Pascual y Gomez denunció ante el Juzgado de primera instancia el hecho de que Donato Oliver y otros se constituyeron en la dehesa llamada de Galiana, de la propiedad de D. Celestino Barrera y Liaño, que el denunciante lleva en arrendamiento, y en la parte más baja de la expresada dehesa, fuera del cauce natural del río Guadiana, en don-

de se cria espadilla, cañizo y otras brozas, se pusieron á segarlas, siéndole necesario impetrar el auxilio de la Guardia civil para que abandonaran la siega de dichas brozas.

Que no obstante esta intimación á los expresados sujetos, hecha por la Autoridad representada por la Guardia civil, no desistieron aquellos de su propósito y volvieron nuevamente á su obra en el día 14 de aquel mismo mes, teniendo el denunciante que pedir auxilio al Gobernador de la provincia, quien se lo prestó por medio de un subinspector de Orden público y tres agentes más, que se personaron en el sitio donde se encontraban los denunciados, ordenándoles que no siguieran adelante en la siega de la espadilla, como así en efecto lo verificaron:

Que á pesar de tales advertencias; en los días 15 y 16 de aquel mismo mes volvieron nuevamente los referidos sujetos á segar la espadilla en la indicada dehesa de Galiana y llevándosela en una barca propiedad de Oliver á otra dehesa propiedad del Marqués de Casa Triviño. Este hecho cuando menos, en concepto del denunciante, constituía el delito de hurto, por lo cual rogaba al Juzgado se constituyera en dicha dehesa de Galiana con objeto de impedir este abuso y evitar así conflictos que no podían ménos de surgir:

Que constituido en efecto el Juzgado en la expresada dehesa de Galiana y encontrando en ella á los sujetos denunciados, mandó depositar la espadilla que habian segado, volviéndose el Juzgado á la capital con los autos del hecho denunciado:

Que seguido el procedimiento criminal, y declarados procesados el Donato Oliver y otros, es-

tos acudieron al Gobernador de la provincia para que requiriera de inhibición al Juzgado, toda vez que el hecho por que se les persigue se habia ejecutado en terreno de dominio público:

Que estimada la anterior pretension, el Gobernador dirigió al Juzgado el oportuno requerimiento de inhibición, fundándose en que con arreglo á la ley de Aguas se entiende por *cauce de un río* el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias, correspondiendo aquel al dominio público; en que por circular de aquel Gobierno de provincia se declaran con arreglo á la ley de Aguas del dominio público los cauces ó álveos de los ríos y por consiguiente de aprovechamiento comun los productos forestales y la pesca que de ellos se extraiga, sin que al segar los procesados la espadilla en el sitio de la Alcantarilla y dentro del terreno que ocupa el cauce del río Guadiana, lejos de cometer un delito, han usado de un derecho reconocido y sancionado por las leyes vigentes; en que al acordar el Juzgado la instruccion de diligencias para procesar al Donato Oliver y otros por el supuesto delito de sustracción de productos de propiedad particular, parte del supuesto de que esta tenga tal carácter, é infringe las disposiciones de la ley de Aguas en su art. 275 y concordantes; y citaba la Autoridad gubernativa los artículos 70 y 72 de la ley de Aguas y el 57 del Reglamento de 25 de Setiembre de 1863:

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó acto declarándose competente, alegando que la circular del Gobierno de provincia no declara más que lo que la ley de Aguas determina, y por lo tanto no tiene más fuerza que la mis-

ma ley; en que esta respeta los derechos adquiridos con anterioridad á su publicacion y la circular no adopta medida alguna de policía de aguas públicas, ni concede más aprovechamiento que los que puede otorgar la Administración dentro del círculo de sus atribuciones; que teniendo el hecho que se persigue los caracteres de delito de hurto, al Juzgado y no á la Administración corresponde conocer de él; y por último, que el Juzgado tiene y adquirirá, cuantos antecedentes, crea necesarios para el esclarecimiento y definición del hecho y no hay cuestion alguna previa de la cual dependa el fallo que en la causa ha de recaer.

Que pedido por el Gobernador informe al Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia, lo evacuó en sentido de que los terrenos donde se cria la espadilla son y no pueden menos de ser de dominio público, puesto que dicha planta no puede desarrollarse sin que se encuentren sus raíces completamente bañadas por las aguas en la casi totalidad del año, y es de todo punto evidente que esta condicion no puede llenarse sin que los indicados terrenos estén sobradamente recubiertos por las aguas en las avenidas ordinarias.

Que en su virtud, y de acuerdo con la Comision provincial, el Gobernador insistió en su requerimiento, resultando el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Vista la ley de aguas de 13 de Junio de 1879, que en su art. 32 expresa que el álveo ó cauce natural de un río ó arroyo es el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias:

Visto el núm. 2.º, art. 31, de la misma ley, segun el cual son de dominio público los álveos ó cauces naturales de los ríos en la ex-

ension que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias:

Visto el art. 226 de la propia ley que determina que la policia de las aguas públicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre, estarán a cargo de la Administracion, y la ejercerá el Ministerio de Fomento, dictando las disposiciones necesarias para el buen uso y aprovechamiento de aquellas:

Visto el núm. 1.º, art. 54, del reglamento de 25 de Setiembre de 1863, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo: que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que el presente conflicto trae origen de la causa criminal instruida contra Donato Oliver, y otros, á quienes se persigue por haber segado espadilla dentro del cauce del rio Guadiana, considerando segun el informe del Ingeniero Jefe de la provincia que dicha planta se cria en sitios bañados por las aguas en las crecidas ordinarias del rio, y por lo tanto en terrenos de dominio público:

2.º Que los cauces ó alveos de los rios pertenecen por regla general al dominio público, salvo cuando existiera sobre una parte de los mismos cauces ó márgenes algun derecho legalmente constituido en favor de particulares, lo cual no sólo no se ha acreditado en el presente caso, sino que, antes bien, resulta que por circular de 21 de Julio de 1873 han sido declarados como de aprovechamiento comun los productos forestales del Guadiana, de donde ha lugar á deducir que corresponde á la administracion resolver previamente si los denunciados por el querelante se extralimitaron ó no de los términos de la concesion otorgada en la referida circular respecto á los aprovechamientos de que se trata; y

3.º Que mientras no recaiga resolucion administrativa sobre la indicada cuestion previa, de la cual puede depender el fallo que en su dia dicten los Tribunales de justicia, ha podido suscitarse por el Gobernador el presente conflicto:

Conformandome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á quince de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco.—Alfonso.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

Gaceta núm. 163.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

LEY.

Don Alfonso XII, Por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El derecho de reunion pacifica que concede á los españoles el art. 13 de la Constitucion puede ejercitarse por todos, sin mas condicion, cuando la reunion haya de ser pública, que la de dar los que la convoquen conocimiento escrito y firmado del objeto, sitio, dia y hora de la reunion, 24 horas antes, al Gobernador civil en las capitales de provincia, y á la Autoridad local en las demás poblaciones.

Art. 2.º Por reunion pública, para los efectos de esta ley, se entiende la que haya de constar de más de 20 personas, y haya de celebrarse en edificio donde no tengan su domicilio habitual los que la convoquen.

Art. 3.º Las reuniones públicas, procesiones cívicas, séquitos y cortejos de igual índole necesitan, para celebrarse en las calles, plazas, paseos ó cualquier otro lugar de tránsito, el permiso previo y por escrito de las Autoridades indicadas en el artículo 1.º

Art. 4.º A toda reunion pública puede asistir la Autoridad personalmente ó por medio de sus delegados. En caso de asistir personalmente, ocupará el sitio de preferencia, pero sin presidir ni mezclarse en las discusiones.

Art. 5.º La Autoridad mandará suspender y disolver en el acto:

Primero. Toda reunion pública que se celebre fuera de las condiciones de esta ley.

Segundo. Todas aquellas que habiéndose convocado con arreglo á ella traten de objetos no consignados en el aviso, ó se verifique en sitio diverso del designado.

Tercero. Las que en cualquier forma embaracen en el tránsito público.

Cuarto. Las definidas y enumeradas en el art. 189 del Código penal.

Y quinto. Aquellas en que se cometa ó se trate de cometer cualquiera de los delitos especificados en el tit. 3.º, libro 2.º del mismo código.

En todos estos casos la Autoridad dará inmediatamente cuenta al Gobierno, y en los dos últimos pasará además al Tribunal competente el oportuno tanto de culpa.

Art. 6.º Las reuniones á que se refiere el art. 2.º, cuando se celebren por los electores de una circunscripcion durante el periodo electoral, podrán ser suspendidas por el delegado de la Autoridad si incurren en alguno de los casos marcados en el art. 5.º

La reunion suspendida podrá verificarse dentro de las 24 horas siguientes, si los que la convocaron lo ponen en conocimiento de la Autoridad: si hubiere lugar en este caso á una segunda suspension; la reunion se entenderá definitivamente disuelta.

Art. 7.º No están sujetas á las prescripciones de esta ley:

Primero. Las procesiones del culto católico.

Segundo. Las reuniones de este mismo culto y las de los demás tolerados que se verifiquen en los templos ó cementerios.

Tercero. Las que verifican las asociaciones y establecimientos autorizados, con arreglo á sus estatutos aprobados por la Autoridad.

Cuarto. Las que tienen lugar en las funciones de teatro y demás espectáculos.

Por tanto.

Manlamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á quince de Junio de mil ochocientos ochenta.

—Yo el Rey.—El Ministro de la Gobernacion, Francisco Romero y Rohledo.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

REAL DECRETO.

Usando de las facultades que concede al Gobierno el art. 14 de la ley de 5 del actual, y en virtud de lo dispuesto en Real decreto de 12 del corriente mes; de acuerdo con el Consejo de Ministros y á propuesta del de Ultramar,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se abre suscripcion pública para negociar 520.500 billetes hipotecarios del Tesoro de

la isla de Cuba, importantes 260.250 000 pesetas nominales, de los creados por Real decreto de 12 de Junio corriente en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley de presupuestos de Cuba.

Art. 2.º El tipo fijo para la suscripcion es el de 83 por 100 del valor nominal de los billetes. La suscripcion se abrirá el dia 30 del corriente mes de Junio, á las ocho de la mañana, en el Banco Hipotecario de España y en el Banco de Castilla en Madrid, en el Banco Hispano-Colonial en Barcelona, y en los demás puntos de España ó del extranjero que el Gobierno determine, y quedará cerrada el mismo dia, á las doce de la noche. Los establecimientos que abran la suscripcion pública percibirán 1/4 por 100 de comision sobre el importe efectivo de los billetes que se adjudiquen á las suscripciones realizadas y liquidadas en cada establecimiento, siendo de cuenta de estos el pago de corretaje á los Agentes y Corredores, y el de los gastos de publicidad. La suscripcion total queda desde luego garantizada al Tesoro de Cuba, cuya obligacion ha contraido el mismo Banco Hispano-Colonial segun contrato.

Art. 3.º Los pedidos para la suscripcion se harán en los ejemplares que facilitaran los centros encargados de realizarla, expresando el número de billetes hipotecarios que desea obtener cada suscriptor, acompañando el resguardo del respectivo centro que acredite haber satisfecho el 20 por 100 del valor nominal de los billetes que pida, y ofreciendo pagar el resto en los plazos que el artículo siguiente determina. Si los pedidos de suscripcion excediesen de los 520.500 billetes, se hará el correspondiente prorrateo, y en este caso lo que en el primer pago exceda del 20 por 100 de los billetes que hayan de recibir se aplicará al segundo plazo y sucesivos, con la variacion correspondiente á la diferencia anticipada. La adjudicacion de los billetes que á cada suscriptor correspondan tendrá lugar antes del 8 de Julio próximo.

Art. 4.º El pago del importe de la suscripcion se hará en los plazos y proporciones siguientes: 20 por 100 en el acto de la suscripcion, y el resto en los plazos siguientes: el 31 de Junio próximo, y el resto en los plazos siguientes.

20 por 100 el 31 Agosto próximo.
 23 del 30 de Setiembre próximo.

83 por 100.
 A cuenta de este último plazo se admitirá en pago el importe del primer cupon de los billetes hipotecarios.

Art. 5. Los suscritores podrán realizar los plazos á que se refiere el artículo anterior en efectivo ó en pagarés expedidos por el Ministerio de Ultramar, ó en letras del mismo á cargo de las Comisiones de Hacienda de España en el extranjero, haciéndose en este caso el descuento de los efectos á razón del 6 por 100 anual por los días que les falte hasta su vencimiento. Los suscritores podrán anticipar los plazos, y en este caso tendrán derecho al abono de intereses á razón de 6 por 100 anual.

Art. 6. Conocida y publicada la parte proporcional que corresponda á cada suscriptor, podrá satisfacerse su importe al vencimiento de los plazos ó por anticipación, con arreglo á lo determinado en el artículo anterior.

El pago total es el que dará derecho á recibir los billetes; y mientras estos no se hallen confeccionados, carpetas provisionales emitidas por el Banco Hispano-Colonial con expresion de la numeracion correspondiente á los billetes que representen.

Art. 7. El Banco Hispano-Colonial centralizará los productos de la suscripcion, y rendirá al Ministerio de Ultramar la oportuna cuenta general de productos y gastos tan luego como terminen todas las mencionadas operaciones.

Art. 8. El Ministro de Ultramar adoptará las demás disposiciones necesarias para la ejecucion de este decreto.

Dado en Palacio á quince de Junio de mil ochocientos ochenta y tres.—El Ministro de Ultramar, Cayetano Sanchez Buscillo.

GOBIERNO DE PROVINCIA
 JUNTA PROVINCIAL
 DE INSTRUCCION PÚBLICA.

CIRCULAR.

Esta Junta recuerda de nuevo á las locales de primera enseñanza,

za, el cumplimiento del art. 8.º del Real decreto de 21 de Noviembre último, en la parte que á ellas incumbe, y espera que los exámenes públicos en las escuelas de primera enseñanza, se celebren con toda regularidad, en el actual mes de Junio, remitiendo á la brevedad posible las propuestas de los niños que mas se distinguen en los exámenes, á fin de expedirle el Excmo. Sr. Gobernador, los diplomas de honor á que se hayan hecho acreedores por su aplicacion.

Orense Junio 18 de 1880.—El Gobernador Presidente, Victor Nöboa Limeses.—José Lorenzo Gil, Secretario.

TERCERA SECCION

COMANDANCIA GENERAL

subinspección de Ingenieros de Galicia.

Hallándose vacante la plaza de Conserje de edificios militares de la ciudad de Tuy dotada con la gratificacion de 25 pesetas mensuales y debiendo proveerse en sargentos, cabos ó soldados (sabiendo estos últimos leer y escribir) de todas las armas é institutos del Ejército que no se hallen en servicio activo, prefiriendo á los que disfruten algun sueldo de retiro, se convoca por medio de este anuncio que se inserta en los Boletines oficiales de las cuatro provincias del Distrito militar para la mayor publicidad.

En su consecuencia los interesados á quienes con venga, dirigirán sus solicitudes al Excmo. señor Director general de Ingenieros acompañando copia de su licencia absoluta autorizada por funcionario competente; certificacion de buena conducta, nota separada indicando el punto de residencia (y además su cédula personal que les será devuelta luego de tomada razon) cuyos documentos para el oportuno curso á dicho Jefe superior despues de examinados, deberán presentarse en la Secretaria de esta Comandancia general en la cual se admiten las solicitudes hasta el dia 15 de Julio, próximo inclusive.

Coruña Junio 12 de 1880.—P. A., el Coronel encargado del

despacho ordinario, Vicente Izquierdo.

ARTILLERIA.

Comandancia general subinspector del Distrito de Galicia.

Excmo. Sr.: El Excmo. Sr Director general del Cuerpo en 10 del actual me dice lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Vacante una plaza de auxiliar de oficinas de 4.ª clase en la fabrica de Granada dotada con el sueldo anual de 912.50 pesetas anuales, apcion á derechos pasivos y á los ascensos reglamentarios, será provista con sujecion al art. 6.º del reglamento del personal del material y al 7.º de la Real orden de 22 de Febrero de 1878 por los sargentos del Cuerpo que hayan cumplido el tiempo de servicio correspondiente al reemplazo á que pertenezcan y á falta de estos, por licenciados tambien del Cuerpo prefiriendo á los de mayor graduacion.

Con tal objeto se circulará entre los referidos sargentos que

pondran al pié de esta circular el «enterado» y se publicará en los Boletines oficiales de ese distrito.

Un reglamento del personal del material se facilitará á los aspirantes en el lugar que V. E. designe, para que puedan enterarse de él, en razon á que deberá someterse á sus prescripciones el elegido.

Los aspirantes remitirán sus instancias por conducto regular, si estuviesen en activo, y directamente si licenciados á esta Direccion general para antes del dia 1.º de Agosto próximo venidero acompañadas de copias de la filiacion ó licencias absolutas.»

Lo que traslado á V. E. á fin de que se sirva ordenar su insercion en el Boletín oficial de la provincia de su digno mando, significándole que el reglamento del personal se hallará de manifiesto en los parques de Artilleria de este Distrito que son los de esta Capital, Ferrol y Vigo.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Coruña Junio 14 de 1880.—El Brigadier Comandante general Subinspector, Mamerto Diaz Ordoñez.—Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia de Orense.

La Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, en uso de las atribuciones que le concede el decreto de 5 de Agosto de 1874 acordó en 31 de Mayo último, de conformidad á lo dispuesto en el art. 137 de la Instruccion de 31 de Mayo de 1855, se publique el nombre del comprador de las fincas que á continuacion se expresan, á quien como mas ventajoso posterior fueron adjudicadas por dicha superioridad, en virtud del remate de 30 de Marzo próximo pasado.

Num. del inventario.	Nombre del comprador.	Vecindad de la finca.	Clase de la finca.	Situacion.	Importe del remate. Ptas.-Cs.
2507	D. Ricardo Duran y Moure	Leiro	Heredad	Cabrera	13-60
2508	El mismo	idem	idem	Rodujo	13-60
2511	El mismo	idem	idem	Porto do Chau	2-35
2512	El mismo	idem	idem	Cachalvite	3-48
2516	El mismo	idem	Praado	Casar	3-48
2517	El mismo	idem	Pie de castaño	Canto de rio	10-10
2518	El mismo	idem	idem	Feirñal	2-35
2519	El mismo	idem	Monte	Fonte Outeiro	1-23

En su consecuencia se encarga al Sr Alcalde del respectivo distrito donde radican las fincas adjudicadas, hagan entender á su comprador se presente á realizar el pago lo mas pronto posible con apercivimiento de que pasados los 15 días que le están señalados al efecto por instruccion perderá el depósito que consignó para optar á la subasta; se procederá á otra nueva por su cuenta, y quedará responsable á satisfacer la diferencia que resulte entre uno y otro remate, así como á las demás penas marcadas por las instrucciones vigentes.

Orense 16 de Junio de 1880.—El Comisionado principal, Angel M. Lozano.

